

logros alcanzados con la misma en términos de los recaudos hechos, las comisiones pagadas, los problemas confrontados con la implantación de esta Ley, las reclamaciones o alegaciones de los contribuyentes por motivo del cobro realizado y las reclamaciones o demandas judiciales por estos motivos relacionados al procedimiento de cobro, así como cualquier otra información pertinente a la evaluación de la Ley.

Artículo 17.—Se autoriza al Secretario de Hacienda a anticipar de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal, la cantidad de sesenta millones (60,000,000) de dólares, al Departamento de Salud y la cantidad de ciento sesenta y cinco millones (165,000,000) de dólares, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con cargo a los recaudos por la cantidad de doscientos veinticinco millones (225,000,000) de dólares, por concepto del recaudo de deudas morosas, según se dispone por esta Ley.

Artículo 18.—Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Aprobada en 8 de junio de 2000.

**Terrenos eximidos de la Junta de Planificación y
A.R.P.E.—Enmienda**

(P. del S. 2317)

[NÚM. 96]

[Aprobada en 8 de junio de 2000]

LEY

Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, a los fines de eximir a los terrenos cubiertos por esta Ley de las Leyes Orgánicas de la Junta de Planificación y de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y sus reglamentos vigentes; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, se creó para establecer una política gubernamental en cuanto a miles de familias que vivían ocupando terrenos del Estado. Dichas ocupaciones se llevaron a cabo como parte del éxodo de una gran parte de la población rural que se desplazó a las zonas urbanas creando asentamientos o barriadas, las cuales crecieron debido a la tolerancia gubernamental.

La justicia social hace mandatorio que estas familias obtengan sin dilación los títulos de propiedad de los terrenos donde enclavan sus viviendas y donde han vivido por años. De esta manera lograremos que cada familia puertorriqueña pueda tener el beneficio de un hogar propio, que responda a sus legítimas aspiraciones y que sean dueños absolutos de la propiedad donde enclavan sus residencias. Un hogar adecuado y seguro constituye una necesidad básica de todo ser humano, ya que provee un sentido de seguridad y tranquilidad fundamental para el pleno desarrollo personal y como miembro útil de la sociedad.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Artículo 1.—Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada [17 L.P.R.A. sec. 763], para que se lea como sigue:

“Sección 13.—Reglamentación

Se eximen los terrenos cubiertos por esta Ley de las Leyes Orgánicas de la Junta de Planificación y de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y sus reglamentos.

En los casos de transferencia de inmuebles en donde enclaven estructuras pertenecientes a las agencias o instrumentalidades que bajo esta Ley tengan que transferir terrenos al Departamento de la Vivienda estarán exentas las mismas de los requisitos de las leyes y reglamentos de lotificación, Junta de Planificación o de tasaciones para acompañar la escritura de segregación y traspaso al Registro de la Propiedad.

El Secretario del Departamento de la Vivienda, en consulta con estos organismos, adoptará los acuerdos necesarios para implementar esta Ley.”

Artículo 2.—Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Aprobada en 8 de junio de 2000.

Rehabilitación Vocacional—Transferencia

(P. del S. 1960)
(Conferencia)

[NÚM. 97]

[Aprobada en 10 de junio de 2000]

LEY

Para transferir la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; derogar el inciso (e) del Artículo 5; y el Artículo 9; y se reenumeran los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, respectivamente del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado; añadir un inciso (e) al Artículo 2, añadir un nuevo Artículo 9, reenumerar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 como Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994; enmendar el segundo párrafo del inciso (A) del Artículo 8 de la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”; y para derogar la Ley Núm. 414 de 13 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es política pública de todo gobierno fomentar y lograr que sus agencias de gobierno provean servicios de calidad y excelencia a los ciudadanos, máxime cuando se trata de personas con impedimentos. Para el logro de este propósito, se promulgó la Ley Núm. 414 de 13 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, que estableció un sistema de rehabilitación vocacional en Puerto Rico, con la misión de evaluar, planificar, desarrollar y proveer servicios de rehabilitación a personas con impedimentos para que pudieran prepararse y entrar a una actividad de empleo o lograr una vida independiente.

Dicha legislación disponía para la cooperación con el Gobierno Federal a fin de realizar los propósitos y requisitos de cualquier estatuto federal que se relacionara con la rehabilitación vocacional.

Con posterioridad a dicha legislación, la “Ley Federal de Rehabilitación Vocacional de 1973” (29 U.S.C. 720 *et seq.*) fue enmendada en varias ocasiones, siendo las últimas de éstas las del 1998. En el 1998, las enmiendas a la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 se convirtieron en ley como parte del *Workforce Investment Act* (PL-105-220), estableciendo una relación estrecha entre Rehabilitación Vocacional y las leyes de trabajo.

La citada Ley Federal de Rehabilitación de 1973 es una pieza legislativa detallada y específica en cuanto a todo lo relacionado con la operación y funcionamiento del programa y requiere que dicho programa tenga autonomía programática y fiscal, ya que exige que las actividades relacionadas con la rehabilitación de personas con impedimentos sean de la exclusiva responsabilidad de la unidad estatal designada. Además, provee y dispone para una supervisión, coordinación, monitoría y auditoría del nivel federal para asegurar que los servicios se provean conforme a la ley.

Este programa de rehabilitación vocacional es la instrumentalidad gubernamental a cargo de administrar y supervisar